



Comisión de Postulación para la Elección de Magistrados de la Corte de  
Apelaciones y otros Tribunales Colegiados de Igual Categoría

FECHA DE ENTREGA: 06/09/2019 HORA: 3:12

No. DE EXPEDIENTE: 876

NOMBRE DEL POSTULANTE: Xiomara Argentina  
Basillas Reláez

RAZONES DEL MEMORIAL: En el numeral 3,  
mal redacción y la identificación mal  
el Notario.

PERSONA QUIEN RECIBE: Ana Recinos



**EXPEDIENTE 876**

**COMISIÓN DE POSTULACIÓN PARA MAGISTRADOS DE LA CORTE DE  
APELACIONES Y OTROS TRIBUNALES DE IGUAL CATEGORÍA PARA EL PERÍODO  
2019-2024, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. -----**

**XIOMARA ARGENTINA BARILLAS PELAEZ**, de datos de identificación conocidos en el expediente indicado, respetuosamente, con base a la Ley de Comisiones de Postulación, dentro del plazo concedido, presento mi alegato, dentro de la audiencia de descargo que me fue concedida, con base en los siguientes:

#### **HECHOS**

##### **ANTECEDENTES**

- I) El tres de septiembre de dos mil diecinueve, se publicó en el Diario Oficial, el listado de la Comisión de Postulación para Magistrados de la Corte de Apelaciones y Otros Tribunales de igual Categoría para el Período 2019-2024, por medio del cual se notifica a los (as) abogados (as) que presentaron sus expedientes para participar en la selección de profesionales que integrarán la nómina de 270 candidatos (as) a ocupar las magistraturas de la Corte de Apelaciones y otros Tribunales de igual categoría, que de acuerdo con el artículo 17 de la Ley de Comisiones de Postulación, se procedió a revisar todos los expedientes presentados. Derivado de lo anterior se acordó que los aspirantes que no reúnen los requisitos previstos en la ley y exigidos en la Convocatoria se les informa que tienen los días: miércoles 4, jueves 5 y viernes 6 de septiembre del presente año, de acuerdo a la legislación vigente, para presentar ante la Comisión de Postulación, las pruebas de descargo. La presentación de las mismas no tendrá efectos suspensivos.

##### **PRONUNCIAMIENTO**

De acuerdo a la notificación referida, se me notifica lo siguiente: *“en el numeral 3, mala redacción y la identificó mal el Notario”*.

- II) Me sorprende sobremanera el hecho de que la Comisión adopte una postura contraria a los avances del derecho, a nivel nacional e internacional; es decir, que se pretenda negarle eficacia jurídica a un documento, con el argumento de mala redacción y mal identificación por parte del Notario.
- III) Recordemos que la ratio de la norma permite evitar los formalismos no razonables que vulneren los principios de igualdad, objetividad, proporcionalidad, entre otros. Y en concordancia al *principio del rigor excesivo* en la interpretación y aplicación de la ley conspira contra el verdadero alcance y finalidad sea de los actos sustanciales, sea de aquellos producidos durante la estructuración del proceso<sup>1</sup>.
- IV) Es indiscutible que, el error mecanográfico en el nombre de la postulante, no es impedimento que afecte la transparencia y objetividad del proceso de postulación. Esa es precisamente la tendencia que se adopta en Guatemala, pues, la Corte de Constitucionalidad, en la Sentencia 3481-20018, expresa “un error mecanográfico, por lo que conforme la aplicación de una presunción humana y la razón” ...” cuya calidad se había tenido por acreditada. Y que “...puesto que en aplicación del principio *pro actione*, el error cometido no puede constituir un obstáculo para la admisión y conocimiento del recurso, pues solo evidencia un excesivo rigorismo que vulnera el derecho a recurrir del accionante y, por ende, su derecho a una debida tutela judicial...”.
- V) Y, haciendo acopio de lo plasmado en artículo 4, el Código Civil, es menester indicar que la identificación de la persona además del Documento Personal de Identificación se puede comprobar y corroborar con la Certificación de la inscripción de nacimiento extendida por el Registro Nacional de las Personas; documento que se encuentra debidamente contenido en el presente expediente administrativo; situación que coadyuva a mi identificación correcta como postulante o aspirante a Magistratura de

---

<sup>1</sup>*principio del rigor excesivo* Disponible en [http://www.saij.gob.ar/doctrina/daca880210-morello-exceso\\_ritual\\_manifiesto\\_doctrina.htm?bsrc=ci](http://www.saij.gob.ar/doctrina/daca880210-morello-exceso_ritual_manifiesto_doctrina.htm?bsrc=ci)

Sala de Corte de Apelaciones. Por otra parte, la objetividad e igualdad se manifiestan con el hecho de que la auténtica del Documento Personal de Identificación se respalda con el Certificado de nacimiento y los demás documentos que obran dentro del expediente; del que indudablemente se concluye en que “soy la misma persona”.

- VI) Consecuentemente, el documento cumple con la función autenticadora, desarrollada por la Notaria cuando estampó su firma y selló en el acto, el cual tuvo como cierto, en virtud de estar dotada de fe pública notarial delegada por el Estado. La única forma legítima de restarle valor es reargüirlo de nulidad, a través del juicio ordinario respectivo, ante un órgano jurisdiccional.
- VII) De tal cuenta que, siendo este un proceso de carácter administrativo, regulado en la ley y reglamento de las Comisiones de Postulación, es procedente observar que la omisión en la letra “R” en mi segundo nombre, Argentina, evidentemente es un error mecanográfico, que no genera imposibilidad insuperable para comprender e identificar quien se apersonó en el escrito en referencia, ni constituye un obstáculo en mi identificación; caso contrario, la interpretación o criterio sustentado para rechazar el documento, vulnera mis derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República de Guatemala; debido a que no legitima la interpretación de las normas cuando restrinjan derechos o que perjudiquen al individuo.
- VIII) Por otro lado, respecto a la supuesta mala redacción es imprescindible destacar que, el Código de Notario describe una serie de requisitos en la elaboración de los documentos, entre estos el acta de legalización de documentos; sin indicar de qué forma deben ser redactados; esto es así porque cada persona, Notario, tiene su especial redacción; lo cual no invalida el documento, mientras cumplan con los presupuestos legales mínimos que la Ley establece; situación que se da en el presente caso, puesto que la redacción del acta de legalización de documento no puede ser utilizada para rechazarla. Caso

contrario, la Comisión hubiese establecido una forma, única y universal, para su redacción; proporcionando un modelo; lo que no sucedió; por tanto, no puede utilizarse en mi contra.

## DOCTRINA

Los principios y/o aforismos jurídicos, permiten proponerse como regla en una ciencia o arte. Son declaraciones u oraciones que, de forma concisa, pretende explicar, expresar un principio de forma sucinta, coherente y en apariencia cerrada.

- i. El principio *pro actione* exige que al interpretar los requisitos procesales legalmente previstos, tengan presente la ratio de la norma con el fin de evitar que los meros formalismos o entendimientos no razonables de las normas procesales impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto, vulnerando las exigencias del principio de proporcionalidad.<sup>2</sup>
- ii. De acuerdo al Diccionario Jurídico de Gómez, Liaño<sup>3</sup>, enuncia que de acuerdo al aforismo latino *in claris non fitinterpretatio*, que refiere que: “no hace falta interpretar lo que está claro”.
- iii. El Diccionario de la Real Academia Española RAE, el aforismo latino indica que “Cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quaestio” que significa “cuando en las palabras no hay ninguna ambigüedad, no se debe admitir cuestión sobre la voluntad”.
- iv. En ese sentido en *favoralia sunt amplianda, odiosa sunt restringenda*<sup>4</sup>, indica que las cosas favorables han de ser ampliadas y las odiosas restringidas.
- v. Por su parte, en derecho administrativo impera el aforismo, *odiosa restringenda sunt*,

<sup>2</sup> Principio pro actione Disponible en: <https://www.expansion.com/diccionario-juridico/principio-pro-actione.html>

<sup>3</sup> Principio de in claris non fitinterpretatio, Gómez de Liaño, F; Diccionario Jurídico, 5.a Edición ampliada, Forum, Oviedo, 1996, pág. 175

<sup>4</sup> Principio favoralia sunt amplianda, odiosa sunt restringenda Disponible en <https://dej.rae.es/lema/odia-restringi-et-favores-convenit-ampliari>.

indica que “las cosas odiosas han de ser restringidas y las favorables conviene ampliarlas”<sup>5</sup>.

- vi. Considerando que, Guatemala se rige por las bases o principios fundamentales del sistema del notariado latino <sup>6</sup> en el Título Primero: del Notario y de la Función Notarial<sup>7</sup> es oportuno evidenciar en los numerales siguientes: **Numeral 9.-** Los documentos notariales gozan de una doble presunción de legalidad y de exactitud. La presunción de legalidad comporta que el acto o negocio jurídico que formaliza el documento reúne los requisitos legales requeridos para su validez: y, particularmente, que el consentimiento de los otorgantes se ha manifestado en presencia del notario libre y conscientemente. La presunción de exactitud significa que los hechos que el documento relata y que han sido presenciados por el notario o que a éste le consten por notoriedad, se reputan ciertos. **Numeral 12.-** Los notarios redactarán los documentos notariales conforme a su leal saber y entender y reflejarán en él claramente la voluntad de los otorgantes, que previamente habrán de interpretar, adaptándola a las exigencias legales o de técnica jurídica necesarias para su plena eficacia.. **Numeral 13.-** No se podrá imponer al notario la obligación de que los documentos que autorice deban redactarse conforme a minuta que les presente un letrado o los propios interesados. El notario es libre de aceptar o no la minuta o de introducir en ella, con la conformidad de los otorgantes, las modificaciones que estime pertinentes.
- vii. Finalmente, el Documento de Naciones Unidas, que conmina la Promoción y Protección de Todos los Derechos Humanos, Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, Incluido el Derecho al Desarrollo. Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy manifestó en el informe de la misión a

<sup>5</sup> Principio odiosa restringenda sunt, Disponible en <https://dej.rae.es/lema/odia-restringi-et-favores-convenit-ampliari>

<sup>6</sup> Bases o principios fundamentales del sistema del notariado latino Consejo Permanente de La Haya Holanda Este texto recoge las bases o principios cardinales que inspiran el sistema del Notariado latino. Disponible en <http://www.acervonotarios.com/files/1.5%20Bases%20o%20principios%20fundamentales%20del%20sistema%20del%20notariado%20latino.pdf>

<sup>7</sup> Disponible en Aprobado por el Bureau de la CCNI el 1B de enero de 1986 y por el Consejo Permanente de La Haya, 13, 14 y 15 marzo 1986).

Guatemala en el año 2009 que<sup>8</sup>: 25. El Relator Especial señala que... “deberá existir un procedimiento basado en criterios objetivos y transparentes fundados en la idoneidad, antecedentes académicos y profesionales, y demás criterios que permitan la elección de magistrados independientes, probos y competentes, y asegurando una apropiada participación de la ciudadanía.

#### FUNDAMENTO LEGAL

**Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 28.-Derecho de petición.** Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. - -

**Ley del Organismo Judicial, artículo 17. Buena fe.** Los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. -----

**Código Procesal Civil y Mercantil** enuncia: ... **Artículo 186. Autenticidad de los documentos.** Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo, producen fe y hacen plena prueba. c) Recibe e interpreta la voluntad de las partes dándoles forma legal, al faccionar el instrumento público... -----

**Código de Notariado, Artículo 1º.** El Notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte.-----

Es por ello que la forma de establecer de un hecho o acto ha sido comprobada y declarada por un Notario, es porque aparece su firma y sello lo refrenda.

**Ley de Comisiones de Postulación, Artículo 2.”** De los principios que deben regir la actuación de las Comisiones de Postulación...”

---

<sup>8</sup>Documento de Naciones Unidas, que conmina a la Promoción y Protección de Todos los Derechos Humanos, Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, Incluido El Derecho al Desarrollo. Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy Disponible en [https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/11session/A.HRC.11.41.Add.3\\_sp.pdf](https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/11session/A.HRC.11.41.Add.3_sp.pdf)

## **JURISPRUDENCIA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD**

- i. CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. APELACIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO. EXPEDIENTE, 1853-2012: Guatemala, quince de enero de dos mil trece.
- ii. CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. 3481-2018, APELACIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO. Guatemala, ocho de noviembre de dos mil dieciocho.

## **CONCLUSIONES**

Se establece y evidencia que considerando el señalamiento relacionado a la “mala redacción y la identificó mal el Notario”, que:

- I) El error mecanográfico de la omisión de la letra “R” de dicho acto notarial, no genera imposibilidad insuperable para comprender e identificar quien se apersonó en el escrito en referencia, ni constituye un obstáculo en la identificación de la Postulante.
- II) No lesiona derechos de terceros porque da certeza jurídica, se reviste de fe pública, siendo un acto de buena fe. Caso contrario, excluir el expediente de mérito por el exceso riguroso de formalismos conllevaría una limitación de derechos constitucionales que si ocasionarían vulnerar los principios de igualdad, y de vulnerar los principios de que la Comisión recoge en la Ley de Comisiones de Postulación.
- III) De Acuerdo a la doctrina se entiende que el contenido de los actos no puede convertirse en un obstáculo en la admisibilidad de las actuaciones, ya que no constituyen obstáculos en el procedimiento, situación que de no ser observada me deja en un plano de desigualdad y un estado de indefensión.
- IV) Considerando que Guatemala se rige por un sistema de Notariado Latino legalmente reconocido y ampliamente conocido se reitera el contenido del numeral 12.- Los notarios redactarán los documentos notariales conforme a su leal saber y entender y reflejarán en él claramente la voluntad de los otorgantes, que previamente habrán de interpretar, adaptándola a las exigencias legales o de técnica jurídica necesarias para su



plena eficacia. Y, numeral 13.- No se podrá imponer al notario la obligación de que los documentos que autorice deban redactarse conforme a minuta que les presente un letrado o los propios interesados. El notario es libre de aceptar o no la minuta o de introducir en ella, con la conformidad de los otorgantes, las modificaciones que estime pertinentes. En cuanto a la redacción de la notaria en este y otros casos es libre siempre y que cualquier error es un acto humano que debe ser evaluado desde la presunción humana y la razón, ya que fue redactado de buena fe a requerimiento de la Postulante.

V) La Corte de Constitucionalidad en la Sentencia 3481-2018 constituye en el cuerpo de la resolución de forma expresa que en ese caso “un error mecanográfico, por lo que conforme la aplicación de una presunción humana y la razón” ...”cuya calidad se había tenido por acreditada. Y que “...puesto que en aplicación del principio *pro actione*, el error cometido no puede constituir un obstáculo para la admisión y conocimiento del recurso, pues solo evidencia un excesivo rigorismo que vulnera el derecho a recurrir del accionante y, por ende, su derecho a una debida tutela judicial...”.

VI) Adicionalmente a ello, es menester observar que el principio *del rigor excesivo* no es aplicable cuando se debe proteger un derecho constitucional, en concordancia e integración con los principios fundamentales de la Constitución Política de la República de Guatemala, leyes ordinarias y de la Ley de las Comisiones de Postulación y su Reglamento, ya que vulnera los principios inspiradores de un proceso objetivo y transparente.

VII) Se considera observar que, de acuerdo a la Ley de las Comisiones de postulación en el artículo 13, en cuanto a los principios que deben observar son: transparencia, excelencia profesional, objetividad eliminando criterios, requisitos y condiciones subjetivas y discrecionales, mismos que se demuestran con la documentación que se adjunta en el expediente de mérito.

**VIII)** Respecto a la supuesta mala redacción es imprescindible destacar que, el Código de Notario describe una serie de requisitos en la elaboración de los documentos, entre estos el acta de legalización de documentos; sin indicar de qué forma deben ser redactados; esto es así porque cada persona, Notario, tiene su especial redacción; lo cual no invalida el documento, mientras cumplan con los presupuestos legales mínimos que la Ley establece; situación que se da en el presente caso, puesto que la redacción del acta de legalización de documento no puede ser utilizada para rechazarla. Caso contrario, la Comisión hubiese establecido una forma, única y universal, para su redacción; proporcionando un modelo; lo que no sucedió; por tanto, no puede utilizarse en mi contra.

**PETICION**

1. Que se admita el presente escrito y se agregue a sus antecedentes.
2. Que se tome nota del lugar para recibir notificaciones la dirección que obra en el expediente de mérito.
3. Que se tenga como debidamente presentado ante la Comisión de Postulación, las pruebas de descargo correspondientes en el escrito de alegato.
4. Que se apruebe la presente argumentación, aprobando el perfil de mi persona como postulante a las Magistratura de la Sala de la Corte de Apelaciones; con el objeto de participar de forma libre en igualdad de condiciones basado en criterios objetivos determinados claramente, fundados en la idoneidad, probidad y antecedentes académicos y profesionales de mi persona.

Acompaño 2 copias del presente escrito.

Guatemala, 06 de septiembre de 2019



**Dra. XIOMARA ARGENTINA BARILLAS PELAEZ**

## APELACIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO

### EXPEDIENTE 1853-2012

**CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD:** Guatemala, quince de enero de dos mil trece.

En apelación y con sus antecedentes, se examina la sentencia de veinte de abril de dos mil doce, dictada por la Sala de la Corte de Apelaciones de Familia, constituida en Tribunal de Amparo, en la acción constitucional de amparo promovida por Fernando Alberto Prah! Palma contra la Juez Sexto de Primera Instancia de Familia del departamento de Guatemala. El postulante actuó con el patrocinio del abogado Víctor Ronaldo Castillo Monroy. Es ponente en este caso el Magistrado Vocal IV, Alejandro Maldonado Aguirre, quien expresa el parecer del Tribunal.

### ANTECEDENTES

#### I. EL AMPARO

**A) Interposición y autoridad:** presentado el ocho de marzo de dos mil doce, en la Sala de la Corte de Apelaciones de Familia. **B) Actos reclamados:** a) resolución de treinta de enero de dos mil doce, por la que la autoridad cuestionada rechazó el escrito por medio del cual el ejecutado se opuso e interpuso las excepciones que consideró pertinentes; b) resolución de nueve de febrero del mismo año, que declaró sin lugar la revocatoria intentada contra la decisión señalada en el inciso anterior. Dichas actuaciones están contenidas dentro de la ejecución en vía de apremio que Ana Silvia Gordillo Figueroa, en nombre propio y en el ejercicio de la patria potestad de sus hijos Cristian, Sabrina y Matías, de apellidos Prah! Gordillo, promovió contra el ahora amparista. **C) Violaciones que denuncia:** a los derechos de igualdad, de defensa, de tutela judicial efectiva, de petición, de libre acceso a los tribunales, así como a los principios de seguridad jurídica y del debido proceso. **D) Hechos que motivan el amparo:** de los hechos expuestos por el postulante, de la sentencia apelada y del informe circunstanciado, se resume: **D.1) Producción del acto reclamado:** a) ante la Juez Sexto de Primera Instancia de Familia del departamento de Guatemala se tramita la ejecución en vía de apremio posterior al juicio oral de fijación de pensión alimenticia que Ana Silvia Gordillo Figueroa, en nombre propio y en el ejercicio de la patria potestad de sus hijos Cristian, Sabrina y Matías, de apellidos Prah! Gordillo, promovió contra el postulante; b) el ejecutado se opuso a la demanda e interpuso las excepciones que consideró pertinentes, escrito que fue rechazado por la juez del asunto, mediante resolución de treinta de enero de dos mil doce -**primer acto reclamado**-, al considerar que el solicitante no es parte en el proceso de mérito, pues quien figura como demandado es Fernando Alberto Prah! Palma y no "*Fernando Alberto Prah! Figueroa*"; c) el ejecutado planteó revocatoria contra esa resolución, sustentado en que si bien se cometió error al consignar su segundo apellido en el escrito respectivo, es él quien figura como demandado en el proceso aludido; d) la referida revocatoria fue declarada sin lugar por la juez cuestionada, en resolución de nueve de febrero de dos mil doce -**segundo acto reclamado**-, al considerar que el hecho de que el solicitante haya consignado su segundo apellido en forma diferente, no es un simple error mecanográfico, tal como se pretendió hacer valer, pues en escritos presentados en diferentes fechas, también cometió la misma equivocación; y e) en esa misma fecha se certificó lo conducente contra el accionante, a un juzgado del orden penal, por el delito de negación de asistencia económica. **D.2) Agravios que se reprochan a los actos reclamados:** a) respecto de la primera resolución señalada como lesiva, el postulante considera que la autoridad cuestionada vulneró sus derechos

fundamentales enunciados, porque no admitió el escrito de oposición de demanda e interposición de excepciones, por haber incurrido en error en la consignación de su segundo apellido; sin embargo, no se tomó en cuenta que el mismo fue signado por él, que se identificó con el número de proceso correspondiente y se acompañó la prueba documental que sustentaba el planteamiento de esos mecanismos de defensa. Tampoco se tomó en consideración que el Derecho Procesal de Familia no es formalista, por lo que la autoridad reclamada, apoyada en las facultades discrecionales de las que goza, a tenor del artículo 12 de la Ley de Tribunales de Familia, debió darle trámite a las excepciones interpuestas, ya que éstas destruían la eficacia del título que se pretende ejecutar; **b)** con relación al segundo acto reclamado, el postulante manifestó que la juez del asunto hizo caso omiso de sus argumentos de impugnación, obviando que es él quien figura como ejecutado, dejándolo en estado de indefensión mediante una actitud arbitraria y rigorista, pues, inclusive, se le certificó lo conducente a un juzgado del orden penal, por el delito de negación de asistencia económica, lo cual es improcedente; y **c)** debe considerarse que su intención no es que se revisen las resoluciones señaladas como agraviantes, sino que se adviertan las violaciones en que incurrió la autoridad reprochada, al no permitirle defenderse dentro del proceso subyacente. **D.3) Pretensión:** solicitó que se declare con lugar el amparo y, como consecuencia, se dejen sin efecto, en forma definitiva, los actos reclamados. **E) Uso de recursos:** revocatoria contra el primer acto reclamado. **F) Casos de procedencia:** invocó los contenidos en las literales a), d) y h) del artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. **G) Leyes que se estiman violadas:** citó los artículos 2º., 4º., 12, 28, 29, 152, 154, 203, 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 10 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre; 12 de la Ley de Tribunales de Familia; y 16 de la Ley del Organismo Judicial.

## II. TRÁMITE DEL AMPARO

**A) Amparo provisional:** se otorgó. **B) Tercera interesada:** Ana Silvia Gordillo Figueroa. **C) Informe circunstanciado:** la autoridad cuestionada informó lo siguiente: **a)** Ana Silvia Gordillo Figueroa, en nombre propio y en el ejercicio de la patria potestad de sus hijos Cristian, Sabrina y Matías, de apellidos Prah! Gordillo, promovió ejecución en vía de apremio contra Fernando Alberto Prah! Palma, quien fue debidamente notificado y requerido de pago; **b)** el veinticinco de enero de dos mil doce, Fernando Alberto Prah! "Figueroa" presentó escrito interponiendo nulidad por violación de ley y vicio de procedimiento contra la notificación y acta de requerimiento de pago, petición que fue rechazada por advertirse que el presentado no era parte dentro del proceso de mérito; **c)** el veintiséis de enero del año mencionado, Fernando Alberto Prah! "Figueroa" nuevamente presentó escrito interponiendo nulidad por violación de ley y vicio de procedimiento contra la resolución que admitió para su trámite el proceso relacionado, la cual fue rechazada por el mismo motivo; **d)** el veintisiete de enero de dos mil doce, esa misma persona presentó memorial por medio del cual interpuso las excepciones que consideró pertinentes, el que también fue rechazado, mediante la resolución que constituye el primer acto reclamado, aduciendo que el presentado no era parte dentro de la ejecución relacionada; **e)** el ocho de febrero de ese mismo año, la ejecutante solicitó que se certificara lo conducente contra el ahora amparista, a un juzgado penal, por el delito de negación de asistencia económica, accediéndose a esa petición, mediante resolución de nueve de febrero del dos mil doce; **f)** el ejecutado interpuso revocatoria contra la resolución de treinta de enero de dos mil doce, medio de impugnación que fue declarado sin lugar mediante la emisión del segundo acto reclamado, sustentando en que

no se trataba de un simple error mecanográfico o un error ortográfico, tal como lo pretende hacer valer el recurrente, tomando en cuenta que en fechas distintas y en reiteradas ocasiones se ha consignado un nombre diferente del que consta en las actuaciones procesales y, aunque el impugnante manifestó que el Derecho de Familia no es formalista, en el presente caso no se trata de simples formalismos sino de la identificación de una persona, por lo que, atendiendo a lo que dispone el artículo 4º del Código Civil y a los principios de objetividad e imparcialidad, no es viable que el juzgador corrija los errores que cometen los sujetos procesales, como lo es la equivocación del segundo apellido del ejecutado; **g)** el ocho de marzo de dos mil doce, el demandado interpuso nulidad por violación de ley y vicio de procedimiento contra la resolución señalada en el inciso anterior, la que, el nueve de marzo del año citado, fue rechazada por improcedente. **D) Prueba:** la aportada en la primera instancia de este proceso constitucional de amparo. **E) Sentencia de primer grado:** la Sala de la Corte de Apelaciones de Familia, constituida en Tribunal de Amparo, **consideró:** *"...De las actuaciones deriva que los dos actos reclamados devienen en virtud del ejercicio del derecho de defensa del ejecutado, consagrado constitucionalmente, sin embargo, dicho precepto legal debe ser cumplido con las formalidades correspondientes y no en inobservancia de normas de carácter ordinario que dan certeza jurídica a cada uno de los actos llevados a cabo dentro del proceso. C) En ese orden de ideas, encontramos que el ejecutado al comparecer al juicio adyacente lo hace de manera diferente a la prevista en el artículo 61, numeral 3, del Código Procesal Civil y Mercantil, el que especifica que la primera solicitud que se presente a los Tribunales de Justicia contendrá nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente..."; precepto legal que incumplió el ejecutado de manera reiterada al haber comparecido al juicio identificándose como Fernando Alberto Prah! Figueroa en los escritos presentados al juzgado de origen de fechas veinticinco (25) de enero de dos mil doce (2012), veintiséis (26) de enero del mismo año y veintisiete (27) del mismo mes y año; cuando el nombre correcto del ejecutado es Fernando Alberto Prah! Palma. No observando en consecuencia la norma legal citada. D) El postulante fundamentó su pretensión de amparo en que si bien es cierto el nombre de los escritos a los que se ha hecho referencia contenían el error ya descrito, los documentos de soporte de los mismos corresponden a la persona que efectivamente se encuentra siendo ejecutada en el proceso subyacente y además, expuso, que la Corte de Constitucionalidad en reiterados fallos ha sostenido que errores como el cometido y que ya fue puntualizado, no deben redundar en limitar el derecho de defensa de los sujetos procesales, acompañando para el efecto fallos emitidos por la referida Corte de fechas (...) sin embargo, con las sentencias acompañadas en este expediente, la doctrina contemplada en la ley de la materia no se advierte. Amén de lo anterior debe dejarse constancia que este tribunal también realizó la investigación correspondiente con relación a doctrina sentada por la Corte de Constitucionalidad, en el mismo sentido de las sentencias acompañadas, pero dicha investigación fue infructuosa; en virtud de lo cual se hace procedente dictar el fallo correspondiente, denegando la pretensión constitucional solicitada, debiendo hacer las demás declaraciones que en derecho corresponden. De conformidad con lo que establece la ley, la condena en costas será obligatoria cuando se declare procedente el amparo. También podrá exonerarse al responsable, cuando la interposición del amparo se base en la jurisprudencia previamente sentada, cuando el derecho aplicable sea de dudosa interpretación y en los casos en que, a juicio del Tribunal, se haya actuado con evidente buena fe, aspecto último que*



*estimamos se evidenció en el trámite de la presente acción; por imperativo legal se hace la condena correspondiente al abogado patrocinante al pago de la multa que se especificará en la parte resolutive del presente fallo". Y resolvió: "...I) Deniega el amparo solicitado por Fernando Alberto Prah! Palma en contra de la Jueza Sexta de Primera Instancia del ramo de Familia del municipio y departamento de Guatemala. II) Por lo considerado no se realiza condena en costas. III) Se impone al abogado patrocinante de la acción de amparo intentada, Víctor Ronaldo Castillo Monroy, el pago de la multa de doscientos quetzales, misma que deberá hacer efectiva dentro del tercer día de encontrarse firme el presente fallo en la Tesorería de la Corte de Constitucionalidad, cuyo cobro, en caso de incumplimiento, se hará por la vía legal correspondiente..."*

### III. APELACIÓN

**El postulante y Ana Silvia Gordillo Figueroa, tercera interesada,** apelaron la sentencia dictada por el Tribunal *a quo*, manifestando lo siguiente: **a)** el primero de los mencionados señaló que en el fallo impugnado se hicieron consideraciones contrarias a las constancias procesales, limitándose a expresar las mismas conclusiones mencionadas por la autoridad cuestionada en los actos reclamados, sin tomar en cuenta la jurisprudencia constitucional atinente al caso concreto. Asimismo, indicó que se ignoraron las denuncias de violaciones a sus derechos constitucionales y las argumentaciones de hecho y de derecho en que se fundó la solicitud de amparo; **b)** por su parte, la tercera interesada manifestó que no está de acuerdo con el numeral romano II, de la parte resolutive del fallo apelado, que exonera del pago de las costas procesales al postulante, ya que la única intención de éste ha sido retardar la aplicación de justicia.

### IV. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA

**A) El postulante** reiteró los argumentos expuestos en los escritos de amparo y apelación, enfatizando que la sentencia dictada por el Tribunal *a quo* fue emitida sin examinarse todos los elementos sometidos a enjuiciamiento, lo cual evidencia que el fallo venido en grado no es una decisión motivada. Solicitó que se revoque la sentencia apelada. **B) Ana Silvia Gordillo Figueroa, tercera interesada,** reiteró lo manifestado en su escrito de apelación y agregó lo siguiente: **a)** lo alegado por el ahora postulante, relativo a que la forma en que consignó su segundo apellido es un error involuntario, no es cierto, porque en tres escritos se identificó con los apellidos Prah! Figueroa, lo que hace evidente su actitud de desvirtuar los múltiples errores en los que ha incurrido; **b)** si bien, la Ley de Tribunales de Familia establece la flexibilidad en las actuaciones en el ámbito de familia, el artículo 4º del Código Civil establece la forma como se identifica una persona, y no bajo el argumento de la flexibilidad se debe omitir el contenido de esa normativa. Solicitó que se dicte la resolución que en derecho corresponde. **C) El Ministerio Público** manifestó que no comparte el criterio sustentando por el Tribunal de Amparo de primer grado, ya que la autoridad cuestionada actuó con excesivo rigorismo, al declarar sin lugar la revocatoria planteada por el ahora amparista contra el rechazo de la oposición y excepciones formuladas dentro del proceso de mérito, pues, no obstante existir error en el nombre del ejecutado, la forma en que se pronunció la juez del asunto imposibilita su defensa; de ahí que el amparo promovido debe otorgarse, con el fin de que la parte ejecutada tenga la oportunidad de hacer valer los medios de defensa que la ley prevé para lograr la tutela de sus derechos, porque en situaciones como las que ahora se examina debe aplicarse el principio *pro actione*. Solicitó que se revoque la sentencia impugnada.

### V. AUTO PARA MEJOR FALLAR

En cumplimiento de lo ordenado por esta Corte, en resolución de veinte de junio de dos mil doce, la Juez Sexto de Primera Instancia de Familia del departamento de Guatemala remitió copia certificada del expediente que contiene la ejecución en vía de apremio tramitada dentro del juicio oral de fijación de pensión alimenticia un mil sesenta - dos mil ocho - un mil setecientos noventa y tres (1060-2008-1793).

### CONSIDERANDO

#### -I-

El amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o las restablece en su goce cuando la violación ha ocurrido. Procede siempre que las leyes, disposiciones, resoluciones o acto de autoridad lleven implícita una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan.

#### -II-

El asunto sometido a examen en la vía constitucional se refiere a las resoluciones emitidas por la juez cuestionada, por las que rechazó para su trámite el escrito de oposición e interposición de excepciones presentado por el ejecutado, así como la resolución que declaró sin lugar la revocatoria intentada contra esa decisión, luego de advertirse que el segundo de los apellidos consignados no coincide con el del ahora postulante, concluyendo la juzgadora que el compareciente no era parte dentro del proceso subyacente. En ese orden de ideas, esta Corte advierte que, siendo que el primer acto reclamado fue impugnado por el ejecutado mediante revocatoria, la cual fue desestimada oportunamente, es esta resolución la que reviste el carácter de definitiva, por lo tanto, es evidente que el primer acto señalado como agravante quedó subsumido en el segundo, por lo que es en cuanto a éste último que se hará el examen constitucional correspondiente.

#### -III-

Como cuestión previa al análisis, esta Corte, del estudio de los antecedentes, advierte los siguientes hechos relevantes: **a)** el ejecutado -ahora amparista- presentó, sucesivamente, tres escritos de fechas veinticinco, veintiséis y veintisiete de enero de dos mil doce, en los que se identificó como Fernando Alberto Prah! **Figueroa**, por medio de los cuales interpuso nulidades por violación de ley y vicio de procedimiento, se opuso a la demanda y planteó las excepciones que, a su juicio, destruían la eficacia del título que se pretende ejecutar; **b)** esos escritos fueron rechazados por la juez del asunto, sustentada en que el solicitante no era parte dentro del proceso de mérito, mediante resoluciones que le fueron notificadas al postulante el uno de febrero de ese mismo año; **c)** el ejecutado planteó revocatoria contra la decisión de rechazarle el último escrito aludido, lo cual constituye el primer acto reclamado, argumentando que pese a que debido a un error mecanográfico, se consignó erróneamente su segundo apellido, de las constancias procesales la juzgadora pudo advertir que quien compareció a juicio fue él, por lo que, con tal proceder, se le está imposibilitando el ejercicio de sus derechos de defensa, petición y libre acceso a tribunales; **d)** la referida revocatoria fue declarada sin lugar, en resolución de nueve de febrero de dos mil doce -**segundo acto reclamado**-, con fundamento en que: *"...no se trata de un simple error mecanográfico provocado por la computadora tal como lo pretende hacer valer el recurrente, porque en fechas distintas y en reiteradas ocasiones se cometió el mismo error consignando un nombre distinto del que consta en las actuaciones procesales de la ejecución relacionada (...) ni mucho menos ortográfico porque no es una letra o una tilde la que falta, sino que es el segundo apellido el cual es totalmente diferente de la persona demandada..."*.

El relato de hechos expuestos con anterioridad permite advertir que si bien el ahora postulante cometió el yerro de consignar equívocamente su segundo apellido, lo hizo en tres escritos que presentó en forma consecutiva, cuyo rechazo le fue notificado, conjuntamente, el uno de febrero de dos mil doce, razón por la cual no pudo percatarse de su error sino hasta después de haber interpuesto las excepciones que también le fueron rechazadas.

Esta Corte, mediante auto para mejor fallar, requirió a la juez reprochada la remisión del expediente que contiene la ejecución en vía de apremio que subyace al amparo, con el objeto de verificar si de la lectura de lo obrante en autos, la autoridad reclamada estaba en posibilidad de establecer que se trataba de la misma persona que figura como ejecutado. En ese orden de ideas, aprecia este Tribunal que, del contenido del escrito por medio del cual el ahora postulante se opuso a la demanda e interpuso las excepciones que estimó pertinentes, la juez de la causa tuvo elementos suficientes para colegir que el solicitante era el ejecutado dentro del proceso subyacente, pues éste, en el encabezado del referido escrito identificó con claridad el número de expediente al que hacía referencia, citó los nombres de sus tres hijos menores de edad, a favor de quienes se solicitó el pago de las pensiones alimenticias reclamadas, y esgrimió argumentos que están dirigidos a refutar lo afirmado por la demandante, así como a atacar la eficacia del título que se pretende ejecutar. Aunado a lo anterior, se advierte que a folios del cuarenta y cinco al ciento nueve de la pieza del antecedente, obran, entre otros, varios recibos de caja, facturas y copia del finiquito contenido en documento privado con firmas legalizadas, emitidos a nombre de **Fernando Alberto Prahí Palma**; de ahí que, a criterio de esta Corte, la autoridad cuestionada debió dar íntegra lectura a esos documentos y determinar que, en efecto, se trataba de la misma persona, tomando en cuenta, además, que esa petición correspondía a la actitud principal del ejecutado (oposición e interposición de excepciones). Ante tales circunstancias, debió atenderse el principio *pro actione*, por ser el más coherente con los derechos de defensa, petición y libre acceso a tribunales, y con el valor justicia; y así permitir que se resolviera acerca de las motivaciones de un recurso o mecanismo de defensa instado oportunamente, pues las formalidades procesales deben interpretarse en el sentido que no afecten la efectividad de los derechos fundamentales aludidos.

Con base en lo anterior, esta Corte estima que los motivos invocados por la autoridad reclamada, para desestimar la revocatoria intentada contra la resolución que rechazó para su trámite la oposición e interposición de excepciones, son carentes de razonabilidad, pues el yerro en el segundo apellido no generaba imposibilidad insuperable para comprender que quien se apersonó en el escrito en referencia era el ejecutado.

El análisis realizado *ut supra*, permite concluir que la autoridad reclamada, al emitir el acto señalado como agravante, vulneró los derechos constitucionales enunciados por el amparista, pues el derecho de defensa, en términos generales, garantiza que quienes intervienen en la sustanciación de un procedimiento, sea administrativo o jurisdiccional, tendrán la oportunidad de exponer sus argumentos y proponer sus respectivos medios de prueba, de rebatir los argumentos y controlar la prueba de la parte contraria y de promover los medios de impugnación en la forma prevista legalmente. En ese sentido, cualquier acto de autoridad que, en contravención a la normativa aplicable y sin atender a las circunstancias concretas del procedimiento de que se trate, impida hacer uso de tales mecanismos, reviste violación a aquel derecho constitucionalmente reconocido, razón por la que, en el presente caso, la protección constitucional instada



debe ser declarada con lugar y, al haber resuelto en distinto sentido el Tribunal *a quo*, debe revocarse el fallo apelado, a efecto de que se deje en suspenso, en forma definitiva, el acto reclamado, debiendo la autoridad reprochada emitir nueva resolución, tomando en cuenta lo aquí considerado

**-III-**

Con relación a los motivos de apelación expresados por Ana Silvia Gordillo Figueroa -tercera interesada-, por la forma en que se resuelve el presente amparo, esta Corte considera que es innecesario emitir pronunciamiento alguno.

**-IV-**

Conforme al artículo 45 de la Ley de la materia, es obligatoria la condena en costas cuando se declare procedente el amparo, sin embargo, en el presente caso, este Tribunal estima que no es procedente realizar tal declaración en contra de la autoridad reprochada, por la presunción de buena fe que revisten las actuaciones judiciales.

**LEYES APLICABLES**

Artículos citados y 265, 268 y 272, inciso c), de la Constitución Política de la República de Guatemala; 7º, 8º, 10, 42, 44, 47, 60, 61, 66, 67, 149, 163, inciso c), 185 y 186 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, y 17 y 34 *Bis* del Acuerdo 4-89 de la Corte de Constitucionalidad.

**POR TANTO**

La Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citadas, resuelve: **I) Sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por Ana Silvia Gordillo Figueroa -tercera interesada-, por los motivos expuestos. **II) Con lugar** el recurso de apelación planteado por Fernando Alberto Prahí Palma -postulante del amparo- contra la sentencia de veinte de abril de dos mil doce, dictada por la Sala de la Corte de Apelaciones de Familia, constituida en Tribunal de Amparo y, como consecuencia: **a) se revoca** la sentencia apelada; **b) resolviendo conforme a Derecho: se otorga amparo** a Fernando Alberto Prahí Palma, restableciéndosele en la situación jurídica afectada; **c) se deja en suspenso**, en forma definitiva, el acto reclamado; **d) para los efectos positivos de este fallo**, la autoridad cuestionada deberá emitir la resolución que en derecho corresponda, tomando en cuenta lo aquí considerado, lo cual deberá realizar dentro del plazo de cinco días contados a partir del día que reciban la ejecutoria de este fallo, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, incurrirá en una multa de dos mil quetzales (Q 2,000.00), sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales consiguientes. **III) No hay condena en costas.** **IV) Notifíquese y, con certificación de lo resuelto, devuélvase el antecedente.**

**HÉCTOR HUGO PÉREZ AGUILERA**  
**PRESIDENTE A.I.**

**ROBERTO MOLINA BARRETO**  
**MAGISTRADO**

**GLORIA PATRICIA PORRAS ESCOBAR**  
**MAGISTRADA**

**ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE**  
**MAGISTRADO**

**JUAN CARLOS MEDINA SALAS**  
**MAGISTRADO**

**MARTÍN RAMÓN GUZMÁN HERNÁNDEZ**  
**SECRETARIO GENERAL**

## **APELACIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO**

### **EXPEDIENTE 3481-2018**

**CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD:** Guatemala, ocho de noviembre de dos mil dieciocho.

En apelación y con sus antecedentes, se examina la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en la acción constitucional de amparo promovida por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, por medio de su Mandataria Especial Judicial y Administrativa con Representación, Shený Siomara García Yash, contra la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del departamento de Izabal. El postulante actuó con el patrocinio del abogado Gustavo Adolfo Cárdenas Díaz. Es ponente en el presente caso la Magistrada Vocal II, Gloria Patricia Porras Escobar, quien expresa el parecer de este Tribunal.

### **ANTECEDENTES**

#### **I. EL AMPARO**

**A) Interposición y autoridad:** presentado el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, en la Corte Suprema de Justicia, Sección de Amparo. **B) Acto reclamado:** resolución de veintidós de marzo de dos mil dieciséis, por la que la autoridad reclamada declaró sin lugar el ocurso de hecho planteado por el postulante contra la resolución dictada por el Juez de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del departamento de Izabal, que rechazó el recurso de apelación que interpuso contra la sentencia emitida en el juicio ordinario laboral que Oseas Emanuel Hernández Barrientos promovió en su contra. **C) Violaciones que se**



**denuncian:** a los derechos de defensa y a la igualdad, así como al principio jurídico del debido proceso. **D) Hechos que motivan el amparo:** de lo expuesto por el postulante y del análisis de los antecedentes se resume: **D.1) Producción del acto reclamado:** a) en el Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del departamento de Izabal, Oseas Emanuel Hernández Barrientos promovió juicio ordinario laboral en su contra, en el que reclamó el pago de reajuste salarial, indemnización, daños y perjuicios y costas judiciales; b) contestó la demanda en sentido negativo; c) el Juez de mérito, al proferir sentencia, declaró con lugar parcialmente la demanda y le condenó al pago del reajuste salarial, absolviéndolo del pago de indemnización y daños y perjuicios; d) apeló esa decisión, sin embargo, el recurso no fue admitido para su trámite, al argumentar el Juez de los autos: "(...) en virtud que la presentada no es parte dentro del presente proceso, no figurando que su nombre corresponda a ninguna de las Mandatarias propuestas por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (...)"; y e) promovió ocurso de hecho ante la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del departamento de Izabal, que mediante resolución de veintidós de marzo de dos mil dieciséis -acto reclamado- lo declaró sin lugar. **D.2) Agravios que se reprochan al acto reclamado:** denuncia el postulante que con la emisión del acto reclamado se vulneraron sus derechos, toda vez que por un excesivo rigorismo se rechazó la apelación -siendo procedente- planteada contra lo resuelto en el juicio ordinario laboral de marras, en virtud del yerro cometido en la identificación de su Mandataria Especial Judicial y Administrativa con Representación. Considera que la Sala reclamada le deja en estado de indefensión procesal, debido a que, según las constancias obrantes en autos, mediante resolución dictada por el juez de los autos de primera instancia, el ocho

de junio de dos mil quince, se tuvo por acreditada la calidad con la que actúa la abogada Shený Siomara García Yash. De manera que, el error cometido al consignar en forma incorrecta el nombre de la profesional referida, no era óbice para que la Sala reclamada no acogiera el recurso promovido y consecuentemente, admitiera a trámite el recurso de alzada que oportunamente instó. **3) Pretensión:** solicitó que se declare con lugar el amparo y se ordene a la autoridad cuestionada acoger el recurso de hecho promovido. **E) Uso de recursos:** ninguno. **F) Casos de procedencia:** invocó los contenidos en los incisos a), b), d) y h) del Artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. **G) Leyes que se consideran violadas:** citó los artículos 4° y 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 365 del Código de Trabajo y 611 del Código Procesal Civil y Mercantil.

## **II. TRÁMITE DEL AMPARO**

**A) Amparo provisional:** se otorgó. **B) Terceros interesados:** a) Oseas Emanuel Hernández Barrientos y b) Inspección General de Trabajo. **C) Remisión de antecedentes:** expedientes formados con ocasión de: a) juicio ordinario laboral 18016-2011-00130, del Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del departamento de Izabal; y b) recurso de hecho 18017-2016-00018, de la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del departamento de Izabal. **D) Medios de comprobación:** se incorporaron como medios de convicción los aportados en el proceso de amparo en primera instancia. Sin embargo, se prescindió del período de prueba. **E) Sentencia de primer grado:** la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, **consideró:** *"...De lo anterior se concluye que con el pronunciamiento de la autoridad impugnada no se produce ninguna violación a los derechos constitucionales del amparista,*



atendiendo la importancia de la identificación de la persona y en observancia a la esencia del elemento jurídico del nombre, la Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado en sentencia del veintisiete de abril de dos mil once, en expediente ochocientos doce guion dos mil diez (812-2010) al expresar: (...) Con base a lo anterior se denota la razón de la existencia del nombre de las personas, así como la forma en la que dicha figura jurídica ha sido abordada en el ámbito internacional, podría principiarse afirmando que el nombre es un derecho humano relacionado con el derecho a la identidad y que corresponde a cada individuo como medio de identificación en las esferas familiares, sociales, jurídicas y demás, por lo que los argumentos expuestos por el postulante carecen de fundamento legal y que lo resuelto por la Sala haya sido contrario a sus intereses, no es causa suficiente para la procedencia del amparo, lo anterior evidencia la ausencia de motivación que justifique la presente acción, pues el solo hecho de la inconformidad del postulante con lo resuelto oportunamente no es pertinente para evidenciar las conculcaciones constitucionales que denuncia. De igual manera, es evidente que no se violentaron los derechos denunciados, pues la autoridad impugnada dictó resolución apegada a derecho, respetando las normas y principios del derecho de trabajo. Por ello, entrar a conocer el fondo del asunto, como se pide, implicaría sustituir a la autoridad impugnada en el ámbito de su competencia, interviniendo en las funciones que corresponden con exclusividad a la justicia ordinaria y no a un tribunal del orden constitucional pues el amparo no puede convertirse en una instancia revisora de lo resuelto. En este sentido se ha pronunciado la Corte de Constitucionalidad en el expediente tres mil ciento noventa guion dos mil once (3190-2011) al expresar: (...) En el mismo sentido se ha pronunciado esa Corte en los expedientes dos mil setecientos quince guion



dos mil once (2715-2011) y tres mil novecientos noventa y dos guion dos mil once (3992-2011). En este sentido, tal y como ha resuelto esta Cámara en otras oportunidades, cuando se ha tenido el acceso a los medios de impugnación ordinarios y los mismos fueron utilizados y la resolución ha sido emitida dentro de las facultades que la ley le otorga a la autoridad impugnada, la acción constitucional de amparo no puede constituirse en una tercera instancia revisora de los actos realizados en la jurisdicción ordinaria. Por lo considerado anteriormente, la Cámara advierte que la pretensión al interponer el amparo, es que se revise la labor intelectual respecto de las consideraciones pronunciadas por la Sala impugnada, lo cual constitucionalmente no le es dable subrogarse a este Tribunal, ya que constituye una función exclusiva del juez jurisdiccional ordinario, debiendo tomarse en cuenta que, esta Cámara se encuentra impedida de pronunciarse acerca del criterio sustentado por la Sala contra la que se reclama, ya que esto sería constituir al amparo en una instancia revisora; concluyéndose que, su inconformidad con dicho fallo no significa que la autoridad impugnada vulneró los derechos que invoca; por lo que, la Sala recurrida, actuó de conformidad con las facultades legales pertinentes, lo que evidencia la notoria improcedencia de la presente acción constitucional de amparo, no existiendo restricción ni limitación alguna respecto de los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes garantizan al postulante. En virtud de la forma como se resuelve la presente acción constitucional de amparo, no se condena en costas al postulante por no haber sujeto legitimado para su cobro, se sanciona con multa al abogado patrocinante..." Y resolvió: "...I) **DENIEGA** por notoriamente improcedente, el amparo planteado por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, a través de su mandataria especial



judicial y administrativa abogada Shený Siomara García Yash, contra la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del departamento de Izabal. II) Se revoca el amparo provisional decretado mediante resolución del veintiuno de junio de dos mil dieciséis, emitido por esta Cámara. III) No se condena en costas al postulante. IV) Se impone multa de mil quetzales al abogado Gustavo Adolfo Cárdenas Díaz, la cual deberá hacer efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los cinco días siguientes a partir de estar firme este fallo; su cobro en caso de incumplimiento se hará por la vía legal correspondiente..."

### **III. APELACIÓN**

El postulante apeló y argumentó que no comparte lo resuelto por el *a quo*, puesto que considera que la autoridad cuestionada al emitir el acto que le causa agravio actuó con excesivo rigorismo, en virtud que considera que el error cometido por su Mandataria al identificarse en forma indebida no constituye un motivo suficiente para dejarle en estado de indefensión. Agregó que, en todo caso al ser el Derecho Laboral poco formalista, debió concedérsele un plazo prudente para subsanar el error cometido. Solicitó que se tenga por promovido el recurso de apelación.

### **IV. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA PÚBLICA**

A) El postulante reiteró sus proposiciones de hecho y de Derecho expuestas en la ilación del amparo. Solicitó que se declare con lugar la apelación promovida y, como consecuencia, se otorgue la protección constitucional pretendida. B) Oseas Emanuel Hernández Barrientos, tercero interesado, argumentó que la sentencia dictada por el *a quo* se encuentra ajustada a Derecho, debido a que, de conformidad con las constancias procesales, las autoridades judiciales





ordinarias resolvieron en forma correcta. Considera que la intención del amparista es la revisión de lo decidido en la jurisdicción ordinaria, pese a que la autoridad cuestionada actuó conforme a las facultades contenidas en el artículo 372 del Código de Trabajo. Solicitó que se declare sin lugar el recurso de apelación y, como consecuencia, se confirme la sentencia de primer grado. **C) El Ministerio Público** señaló que, de conformidad con la jurisprudencia dictada por esta Corte, debe prevalecer el derecho constitucional de defensa cuando el error no afecte el fondo del asunto, como sucede en el presente caso. Añadió que la autoridad reprochada actuó con excesivo rigorismo, violando los derechos del postulante. Considera que debe otorgarse la protección constitucional instada, con el objeto que se admita a trámite el recurso de apelación promovido por el Instituto amparista, a efecto de que tenga la oportunidad de ejercitar su derecho de defensa. Solicitó que se declare con lugar el recurso de apelación y, en consecuencia, se revoque el fallo refutado.

**CONSIDERANDO**

- I -

Procede el amparo, cuando la autoridad contra la que se reclama, actuó con excesivo rigorismo al descartar un ocurso planteado por la inadmisión de un recurso de apelación, asentando como motivo de su rechazo una indebida identificación del sujeto apelante, porque priva a una de las partes de su derecho a recurrir, vulnerando el debido proceso y limitando el acceso a una tutela judicial efectiva.

- II -

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social acude en amparo contra la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del departamento de Izabal y señala como





agraviante la resolución de veintidós de marzo de dos mil dieciséis, que declaró sin lugar el ocurso de hecho planteado por el postulante contra la resolución dictada por el Juez de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del departamento de Izabal, que rechazó el recurso de apelación que interpuso contra la sentencia emitida en el juicio ordinario laboral que Oseas Emanuel Hernández Barrientos promovió en su contra.

El accionante aduce que ese proceder supone conculcación a sus derechos, por los motivos que quedaron reseñados en el apartado de Antecedentes del presente fallo.

El Tribunal de Amparo de primer grado denegó la protección constitucional solicitada, tras considerar que la Sala reclamada actuó dentro de sus facultades legales, atendiendo a la importancia de la identificación de la persona. Concluyó que, la autoridad denunciada al resolver contrario a lo solicitado por el postulante, no provocó las vulneraciones denunciadas.

- III -

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social considera que la decisión objetada le causa agravio, porque la autoridad cuestionada, con excesivo rigorismo declaró sin lugar el ocurso de hecho que planteó contra la decisión de primer grado de denegar la apelación que interpuso contra la sentencia emitida en el juicio ordinario laboral de reajuste salarial que Oseas Emanuel Hernández Barrientos promovió en su contra.

Previo a examinar el agravio relacionado, resulta oportuno indicar que el derecho de defensa, en términos generales, garantiza que quienes intervienen en la sustanciación de un procedimiento, sea administrativo o jurisdiccional, tendrán la oportunidad de exponer sus argumentos y proponer sus respectivos medios de



prueba, de rebatir los argumentos y controlar la prueba de la parte contraria y de promover los medios de impugnación en la forma prevista legalmente. De esa cuenta, cualquier acto de autoridad que, en contravención a la normativa aplicable y sin atender a las circunstancias concretas del procedimiento de que se trate, impida hacer uso de tales mecanismos, reviste violación a aquel derecho constitucionalmente reconocido.

Del examen de los antecedentes remitidos, se advierte lo siguiente: a) el amparista interpuso apelación contra la sentencia por la que el Juez de los autos acogió parcialmente la demanda ordinaria laboral que promovió en su contra Oseas Emanuel Hernández Barrientos. En el escrito contentivo de la referida apelación, la Mandataria Especial Judicial y Administrativa con Representación del postulante se identificó como: *Sheny Xiomara García Yax*, siendo lo correcto *Sheny Siomara García Yash*; b) ese recurso no fue admitido para su trámite por el Juez del asunto, al sostener: *"(...) en virtud que la presentada no es parte dentro del presente proceso, no figurando que su nombre corresponda a ninguna de las Mandatarias propuestas por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (...)";* y c) el accionante ocurrió de hecho ante la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del departamento de Izabal, el cual fue declarado sin lugar mediante la resolución que constituye el acto reclamado, con sustento en que: *"(...) lo resuelto por dicho juzgador se encuentra apegado a derecho, en virtud que al presentar su memorial de interposición del recurso de apelación, la impugnante debió escribir o redactar su nombre en dicho memorial de manera correcta, tal y como se encuentra asentado ante el Registro Nacional de las Personas, pues aunque la pronunciación del mismo suene parecida, el haber sido escrito uno de sus nombres propios y uno de sus apellidos de manera distinta a los asentados*



*en dicho registro, altera la identidad de la impugnante, quien como se establece en la sentencia recurrida no es parte dentro del proceso que se ventila, pues uno de sus nombres propios (Xiomara) y uno de sus apellidos (Yax), no corresponde e identifican a ninguno de los mandatarios propuestos por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social dentro del proceso (...)"*

El relato de hechos expuestos con anterioridad, permite advertir que si bien, la Mandataria del amparista consignó equívocamente su nombre en el escrito de apelación, aprecia este Tribunal que, de las constancias obrantes en autos y de la lectura íntegra del escrito referido, el Juez de la causa tuvo elementos suficientes para colegir que, se trataba de un error mecanográfico, por lo que conforme la aplicación de una presunción humana y la razón, era evidente que se trataba de la Mandataria cuya calidad se había tenido por acreditada, mediante resolución dictada en el proceso de mérito el ocho de junio de dos mil quince (folio ciento ochenta y tres del juicio ordinario laboral subyacente). Asimismo, es pertinente señalar que, el Juez de quien pendía el Juicio si lo estimaba oportuno, en todo caso debió conferirle a la apelante plazo para aclarar el error mecanográfico incurrido o acreditar la calidad con la que actuaba. De ahí que, a criterio de esta Corte, la autoridad cuestionada debió acoger el recurso de hecho planteado, porque era factible determinar que, en efecto, la mandataria que comparecía actuaba en representación del Instituto demandado, o en todo caso, debió darle la oportunidad a la impugnante para aclarar el yerro cometido o acreditar la calidad con que actuaba, según fuere el caso.

Con base en lo anterior, esta Corte estima que los motivos invocados por la autoridad reclamada para desestimar el recurso de hecho intentado, carecen de razonabilidad, debido a que la equivocación cometida por la mandataria del



postulante al apelar la sentencia de primer grado del juicio ordinario laboral subyacente, no generaba imposibilidad insuperable para conferir el recurso interpuesto. Tal circunstancia debió provocar que la autoridad cuestionada acogiera el ocurso de hecho planteado, puesto que en aplicación del principio *pro actione*, el error cometido no puede constituir un obstáculo para la admisión y conocimiento del recurso, pues solo evidencia un excesivo rigorismo que vulnera el derecho a recurrir del accionante y, por ende, su derecho a una debida tutela judicial.

Por los motivos expuestos, resulta pertinente acoger la petición que en amparo se formula, dejando en suspenso el acto reclamado, a efecto de que, con fundamento en lo manifestado y para reconducir las actuaciones por la vía adecuada, la autoridad reprochada dicte nuevo pronunciamiento conforme lo aquí considerado, y siendo que el *a quo* emitió su decisión en distinto sentido, procedente deviene revocar el fallo que se conoce en alzada.

De conformidad con el artículo 45 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la condena en costas será obligatoria cuando se declare procedente el amparo; sin embargo, podrá exonerarse al responsable, cuando la promoción del amparo se base en la jurisprudencia previamente sentada, cuando el derecho aplicable sea de dudosa interpretación y en los casos en que, a juicio del Tribunal, se haya actuado con evidente buena fe. En el presente caso, la actuación de la autoridad cuestionada encaja en el último de los supuestos relacionados, razón por la cual es procedente exonerarla de la condena en costas.

#### **LEYES APLICABLES**

Artículos citados y 265, 268, 272, inciso c) de la Constitución Política de la



República de Guatemala; 1, 5, 6, 8, 27, 42, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 149, 163, inciso c), 179, 185 y 186 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 7 Bis del Acuerdo 3-89 y 35, 36 y 46 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad.

**POR TANTO**

La Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citadas al resolver, declara: I) **Con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -postulante del amparo- como consecuencia, se **revoca** la sentencia apelada, y al resolver **conforme a Derecho**: a) **se otorga amparo** al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social; b) **se deja** en suspenso definitivamente, en cuanto al amparista, la **resolución de veintidós** de marzo de dos mil dieciséis, proferida por la autoridad denunciada dentro del expediente 18017-2016-00018; c) para los efectos positivos de este fallo, la autoridad reclamada deberá dictar nueva resolución tomando en cuenta lo aquí considerado, para lo que se fija el plazo de cinco días **contados** a partir de que reciba la ejecutoria de la presente sentencia, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento, se **les impondrá** la multa de dos mil quetzales (Q. 2,000.00) a cada uno de los Magistrados, sin perjuicio de las demás responsabilidades legales en que pudieran **incurrir**; y d) no se condena en costas a la autoridad objetada por el motivo considerado. II) Notifíquese y, con certificación de lo resuelto, devuélvanse **los antecedentes**.

**DINA JOSEFINA OCHOA ESCRIBÁ**  
PRESIDENTA

**BONERGE AMILCAR MEJIA ORELLANA**  
MAGISTRADO

**JOSE FRANCISCO DE MATA VELA**  
MAGISTRADO



**CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD**  
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A.

*Página 13 de 13*  
*Expediente 3481-2018*

**GLORIA PATRICIA PORRAS ESCOBAR**  
MAGISTRADA

**NEFTALY ALDANA HERRERA**  
MAGISTRADO

**HENRY PHILIP COMTE VELÁSQUEZ**  
MAGISTRADO

**MARÍA DE LOS ANGELES ARAUJO BOHR**  
MAGISTRADA

**MARTÍN RAMÓN GUZMÁN HERNÁNDEZ**  
SECRETARIO GENERAL

